JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, trece de octubre dos mil veintidós

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto que rechazó la demanda, considera que los yerros advertidos fueron subsanados al realizar la descripción del predio que soportaría el gravamen y su beneficiario, aunado a que aportó los documentos que da cuenta de su identificación, ocurriendo lo mismo respecto de todos los predios que integran el *Conjunto Altos del Chicamocha Primera Etapa* y, los bienes que se beneficiarían de la servidumbre, de los que se precisó sus linderos, características, tradición e identificación por lo que no era necesaria, al tenor del artículo 83 del C.G.P., la transcripción de los linderos.

Agrega que al encontrarse constituida la servidumbre no era forzoso para estimar la cuantía aportar el avalúo catastral *actual* del predio sirviente, pues la servidumbre fue estipulada desde antes de la entrada en vigor del Código General del Proceso, sin que con la acción se pretenda su constitución sino dar *valor y eficacia* a la que ya obra en documento solemne.

CONSIDERACIONES

1.1. Como lo dispone el artículo 90 del C.G.P., es procedente interponer el recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda.

Mediante proveído del **4 de febrero de 2022¹** se rechazó la demanda en consideración a que no se subsanó conforme a los parámetros del auto inadmisorio lo indicado en el *numeral 3 literal b) y e)*, y *numeral 5 y 7-*.

1.2. Las causales de inadmisión se regulan en el canon 90 del C.G.P., entre las que se incluyen las atinentes a la falta de requisitos formales de la demanda o porque no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

Al efecto, el artículo 82 del aludido estatuto procesal prevé cuáles son los *requisitos de la demanda*; acorde con las pretensiones invocadas y según la subsanación presentada, sin hesitación alguna se concluye que la acción es para imponer una servidumbre de tránsito referida en la escritura pública 1048 del 16 de mayo de 1997 de la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga, amén de invocarse las previsiones del artículo 908 del código civil para exonerarse del pago de indemnización.

Terciando claridad diamantina sobre el objeto del proceso interpuesto, debe concluirse que contrario a lo interpretado por el apelante, **no** se trata de un proceso *compulsivamente ejecutivo*, pues la acción invocada es propia de los procesos *declarativos*; en segundo lugar, conforme a las pretensiones planteadas y los fundamentos jurídicos de la demanda no es posible hablar de un ejecutivo por obligaciones de hacer o no hacer; en tercer lugar, fuera de toda duda es que las normas procesales aplicables a la demanda son las previstas en el Código General del Proceso por ser la disposición **vigente** para el momento de la interposición de la acción, como bien lo dispone el artículo 40 de la ley 153 de 1887 al ordenar que: “*Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*”; “*... La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.*”, entonces, para el 3 de noviembre de 2021 cuando se presentó la demanda según el archivo 002 del cuaderno de primera instancia, evidente resulta que estaba vigente el código general del proceso, y lo sigue estando, por lo tanto, la acción debe regirse por lo dispuesto en el referido estatuto procesal y al amparo de esta legislación es que de igual manera se desatará la alzada y no bajo las previsiones procesales existentes para cuando se corrió la escritura pública 1048 del 16 de mayo de **1997** de la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga.

1.3. Indicó la primera instancia que de acuerdo con el hecho octavo y la pretensión primera, la franja de la servidumbre que se espera imponer corresponde a los linderos de la *Casa Hacienda El Dorado*, predio que una vez segregado dio lugar a los identificados con matrículas No. 314 – 61920 y No. 314 – 61921, por lo que al ser inmuebles **diferentes** debía identificarse de manera individual para cada uno de ellos la franja de terreno objeto de la servidumbre.

¹ Archivo 007, ibidem.

En la subsanación la parte demandante al referirse al *hecho 11*) de la demanda y la *pretensión 1*) relacionó la franja de terreno por la que pasaría la servidumbre objeto de imposición, especificando sus linderos, colindantes y demás aspectos que permiten su identificación de acuerdo con los documentos que también fueron anexados a la demanda (páginas 25 a 100 del archivo 006 del expediente de primera instancia).

Si alguna duda puede existir en cuanto a la identificación de la franja de terreno que se quiere afectar con el gravamen y que se relaciona en la demanda como perteneciente al predio *Casa Hacienda El Dorado*, desconociendo que hoy existen dos predios segregados como se expone en la providencia recurrida, tal aspecto bajo las hipótesis normativas del canon 82 numeral 4 del C.G.P. no implica el rechazo de la demanda al ser una cuestión de índole eminentemente probatoria que debe examinarse al momento de proferir sentencia, máxime cuando de la redacción de las pretensiones contenidas en la subsanación no es posible predicar ausencia de claridad. En consecuencia, por este aspecto no era procedente rechazar la demanda.

1.4. De acuerdo con el numeral 9 del artículo 82 del C.G.P., es requisito de toda demanda la cuantía del proceso cuando “... *su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite*”; por su parte, el numeral 7 del artículo 26 *ibídem* consagra que en los procesos de servidumbre la cuantía se determinará por “...*el avalúo catastral del predio sirviente*”, amén que bajo la égida de los artículos 17, 18, 20 y 25 de la referida legislación, la cuantía permite conocer cuál es el juez competente para tramitar el proceso.

Atendiendo lo argumentado por el apoderado de la parte demandante en el recurso de reposición² y lo adicionado en el archivo 0011 frente a la apelación, refiere que por tratarse de un proceso conocido doctrinariamente como *compulsivamente ejecutivo* con el que no se pretende la *imposición* de la servidumbre por estar ya constituida, estima que no es aplicable lo previsto en el Código General del Proceso, siendo el *Juez Municipal* de los Santos el juez natural del asunto en primera instancia en virtud del factor de competencia territorial que además es privativo conforme a lo indicado en el numeral 7 del artículo 28 de esa codificación.

Según se expuso en el numeral *1.2.* de esta providencia, impajaritable es que contrario a lo interpretado por el apelante, no se trata de un proceso *compulsivamente ejecutivo*, pues la acción invocada es propia de los procesos *declarativos* y se rige por las disposiciones del código general del proceso; en segundo lugar, como bien lo dispone el artículo 40 de la ley 153 de 1887 “... *La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.*”, al efecto, el canon 26 numeral 7 del C.G.P. prevé que la *cuantía* se determina para el proceso de servidumbre por el avalúo catastral del predio sirviente, aspecto que se resulta relevante bajo lo dispuesto en el artículo 82 numeral 9 *ibídem*, pues además de erigirse en un requisito formal de la demanda, sirve de fanal para saber si el proceso se tramita ante un juez municipal o del circuito, ora bajo el proceso *verbal sumario* o en su defecto, *verbal*, como lo mandan los artículos 368 y 390 del C.G.P.

Por lo tanto, *no* es procedente estimar la cuantía a partir del valor del avalúo catastral vigente para cuando se corrió la escritura pública 1048 del 16 de mayo de *1997* de la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga, pues el legislador no estableció tal opción, sino que debe determinarse de acuerdo con el *avalúo vigente* para el momento de interposición de la demanda, aspecto este que fue causal de inadmisión y no fue atendido oportunamente, entonces, desde esta arista no se revocará la providencia apelada al devenir deficiente la subsanación ordenada.

En mérito de lo expuesto, el suscrito *Juez*,

RESUELVE:

PRIMERO: *Confirmar* el auto proferido el *4 de febrero de 2022* por la *Juez Promiscuo Municipal de Los Santos*, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: *Remitir* al juzgado de origen las presentes diligencias una vez cobre ejecutoria la presente providencia.

NOTIFÍQUESE

² Archivo 008, *ibidem*.

Firmado Por:
Edgardo Camacho Alvarez
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 006
Bucaramanga - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ada0d52c841af5c79e10faf924e832bbde8ad37d4975639eaff1c33eb32431c8**

Documento generado en 13/10/2022 12:46:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>